

Andahuaylas, primeros días de abril del 2005.



La República

## Temblor social en el país

*La expresión explícita y abierta de los conflictos sociales propios del país es cada vez más frecuente, extendida y variada. Y es absurdo pretender trazar la línea separando entre quienes están a favor del conflicto social y quienes están en contra. Por mil razones, hay que aceptar que somos zona de temblores. Pero hacerlo no quiere decir avalar el todo vale en nombre de una u otra reivindicación, justa o no, ni resignación o inacción. Hay que saber diferenciar cada conflicto, identificando las variables políticas, económicas, sociales, delincuenciales, históricas y culturales que pueden estar presentes de una u otra manera, y que muchas veces confluyen, todas, sin que nadie lo sepa e imperceptiblemente hasta que vienen la irrupción o el desborde.*

*Como una prueba de que sí hay solución, comenzamos el bloque presentando la experiencia de la que tanto se habla actualmente por ser manifestación exitosa de una buena relación entre la empresa minera y la población: Tintaya. Viene luego una nota sobre lo que acaba de ocurrir en Andahuaylas; y terminamos con el análisis de lo que pasa en llave (Puno), a un año del repudiable linchamiento de su alcalde.*

# Tintaya:

## Cuando dialogar sí es pactar



Diego Nebel

*Como es público y notorio, hay una intensificación de los conflictos entre minería y población. Y a estas alturas ya sabemos bien lo que NO hay que hacer si queremos evitar que los conflictos continúen; más, si también queremos que, como ocurre en determinados casos, la situación derive en inaceptables actos de violencia. Toca ahora encontrar la veta que permita hacer compatible la explotación minera con los derechos y bienestar de una población generalmente pobre y vulnerable.*

*El acuerdo al que han llegado la empresa y las comunidades aledañas a la minera Tintaya es una experiencia exitosa que hay que mirar con atención. Y no es un milagro, sino el fruto de un premeditado, sincero e inteligente esfuerzo —de todos— de diálogo y concertación. El IDL tuvo además el privilegio de participar en los orígenes de este esfuerzo, constituyéndose por acuerdo de las partes involucradas en una especie de minicomisión de la verdad a cargo de esclarecer lo sucedido y formular recomendaciones, la mayoría de las cuales fueron aceptadas y cumplidas.*

*Dos de nuestros profesionales que participaron directamente de la experiencia, Javier La Rosa y Gabriela Joo, hacen públicas sus reflexiones, luego de que la empresa nos liberó del compromiso de reserva, cumplido hasta la fecha.*

## Lecciones de la solución de un conflicto

javier la rosa

Abogado, IDL

Uno de los pocos casos exitosos de resolución de conflictos sociomineros en el Perú, probablemente el único en los últimos años en el que una gran empresa minera y las comunidades aledañas se han puesto de acuerdo para manejar y resolver sus diferencias, se ha desarrollado en la provincia de Espinar, departamento del Cusco, entre la compañía BHP Billiton Tintaya S.A. y las comunidades de Tintaya Marquiri, Alto Huancané, Bajo Huancané, Huano Huano y Alto Huarca.

Por medio de ese acuerdo, suscrito el pasado mes de diciembre, se ha formalizado un proceso de negociación iniciado a fines del 2001, cuando las

partes principales del conflicto decidieron establecer la Mesa de Diálogo de Tintaya, en la que también participaron la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), la Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas por la Minería del Cusco, Oxfam América y la organización no gubernamental especializada en temas mineros CooperAcción.

El proceso no ha sido fácil. Una serie de marchas y contramarchas caracterizaron la negociación de estos últimos tres años. Sin embargo, cabe señalar como factores de éxito la voluntad de las partes para promover acuerdos razonables; la capaci-

dad de todos los involucrados para participar en una instancia de resolución de conflictos, de manera simétrica y con las competencias adecuadas; y la incidencia del Mining Ombudsman de Oxfam Community Aid Abroad de Australia.

### Antecedentes

Los orígenes del conflicto se remontan a 1982, cuando el Estado expropió 2.368 hectáreas de tierras que pertenecían a las comunidades antes señaladas —especialmente la comunidad de Tintaya Marquiri— a favor de la Empresa Minera Especial Tintaya S.A. Las comunidades recibieron en ese momento una cantidad de dinero y la promesa de que los comuneros serían con-

tratados por la empresa que allí se instalase para explotar cobre. Esto último no sucedió, o se hizo de manera inconstante debido a diversos factores, lo que fue minando la precaria legitimidad de quienes llegaban a consolidar la actividad minera.

Luego la empresa estatal fue vendida a inversionistas privados, primero en 1994 y luego en 1996: a The Broken Hill Proprietary Ltd., de Australia, que se fusionaría con Billiton Plc., de capitales británicos. Lo relevante durante los primeros veinte años de explotación minera fue el tremendo impacto económico, social y cultural que esta actividad ocasionó en las comunidades de la zona, además de una serie de abusos y desmanes contra la población que contribuyeron, con razón, a desprestigiar a la empresa minera.

Precisamente en noviembre del 2000, a raíz de una denuncia de las comunidades de la provincia de Espinar afectadas por la actividad minera y que fue asumida por CONACAMI, la defensoría en minería de Oxfam Australia intercedió ante BHP Billiton Tintaya para que atendiera esas inquietudes. Esto desembocó en las primeras reuniones entre los diversos actores que venían trabajando en la zona, con el propósito de solucionar los casos de contaminación ambiental, violaciones de derechos humanos y los problemas generados por la venta de tierras de las comunidades.

### El proceso de negociación

La idea de conformar una Mesa de Diálogo que permitiera encontrar una solución a los problemas existentes, y que, además, facilitara la identificación de oportunidades de desarrollo en la zona de influencia de la empresa minera, fue uno de los objetivos centrales de dicho espacio de cooperación, que decidió abordar las causas del conflicto a

## Lo aprendido

En el campo de las relaciones entre actividad minera y comunidades, uno de los temas más discutidos en los últimos tiempos ha sido el de la manera más apropiada de abordar los conflictos que se producen cuando se afectan los recursos de estas últimas. Diversas experiencias ocurridas en el país indican que no solo no han prevalecido espacios de resolución de conflictos, sino que en la inmensa mayoría de casos ha sido una de las partes la que ha impuesto a la otra su forma de solución —por lo general las empresas sobre las comunidades—, cerrando toda posibilidad de coexistencia pacífica entre actividad minera y comunidades.

Precisamente por ello, lo ocurrido en Tintaya es una experiencia que debe resaltarse, ya que probablemente el esfuerzo desplegado estaría delineando las pautas que deberían plantearse en el futuro los procesos de negociación minería-agricultura.

Así, es importante que se rescaten lecciones de lo ocurrido. Proponemos algunas ideas:

### 1. Una buena negociación implica que esta sea horizontal

Un aspecto importante en toda negociación es la manera como las partes enfrentadas se perciben. En el caso de los conflictos sociomineros hay una tendencia mayoritaria de las empresas a no aceptar como interlocutor válido a las comunidades o a verlas de manera paternalista, con criterios casi de "beneficencia".

En el caso de Tintaya ha sido muy importante que las comunidades hayan adquirido capacidades para negociar en términos simétricos, con claridad respecto de sus objetivos y de cuál era su verdadero fin.

### 2. Buena fe de las partes involucradas

No deja de llamar la atención la buena voluntad que han mostrado en el caso de Tintaya las partes involucradas. Aun cuando es cierto que no fue fácil "romper el hielo", una vez establecidos niveles mínimos de confianza se cuidó este aspecto hasta el final.

### 3. Espacio inclusivo

Si bien es cierto que los actores principales o partes primarias fueron BHP Billiton y las cinco comunidades campesinas afectadas, existieron otros actores que cumplieron el rol de terceros interesados en obtener un resultado satisfactorio, quienes participaron activamente en la Mesa de Diálogo; fue el caso de CONACAMI, Oxfam América, CooperAcción y la Municipalidad de Espinar.

### 4. No basta actuar dentro de la ley si no se tiene legitimidad

Ha sido muy importante que BHP Billiton no haya seguido el comportamiento adoptado por la mayoría de empresas mineras que se aferran formalmente a la ley, olvidando que en el tema de cómo se relacionan con las comunidades lo más importante es el grado de legitimidad que tienen y deberían mantener en todo momento.

### 5. Papel del Estado

No es casualidad que en la Mesa de Diálogo no haya habido presencia del Estado, específicamente del Ministerio de Energía y Minas. Esto evidencia el nulo papel que esa instancia estatal tiene como regulador de los conflictos que de manera natural se producen en el sector. Tal situación debería hacer reflexionar a empresas mineras y comunidades acerca del necesario cambio de personas y de mecanismos de manejo de conflictos que deberían promoverse en el ente estatal para que asuma un rol de tercero imparcial.

### 6. No crear expectativas, perfil bajo, creatividad

No deja de llamar la atención que mientras la Mesa de Diálogo desarrolló buena parte de sus grupos de trabajo, se tuvo especial cuidado en no inflar las expectativas de las partes, sin que esto signifique que no se informe adecuadamente a todos los involucrados. Esto permitió generar la calma necesaria para hallar soluciones creativas a los problemas presentados, que al momento de hacerlos públicos eran los que las partes habían estado esperando.

través de cuatro grupos de trabajo: una Comisión de Tierras encargada de evaluar todo lo referido a la propiedad de las tierras y los problemas allí generados, remontándose al momento en que se produjeron las expropiaciones y la manera y lugar como fueron reubicados los pobladores; una Comisión de Medio Ambiente que se encargase de proponer medidas para evaluar la contaminación, su control y prevención, estableciendo una línea de base en salud para la actividad ganadera; una Comisión de Derechos Humanos que investigue las denuncias de abusos cometidos por la empresa minera desde su llegada en 1982, así como que proponga medidas de reparación en caso fuesen ciertas las denuncias, encomendándose esta tarea a una entidad independiente que tuviese el respaldo de todos —tarea que recayó en el IDL y la Vicaría de la Solidaridad de Sicuani—; y una Comisión de Desarrollo Sostenible que se ocupase de proponer medidas para generar desarrollo local.

Hacia fines del 2004, ha sido posible que los participantes de la Mesa de Diálogo suscriban un acuerdo marco que establece los lineamientos de lo que serán las relaciones entre comunidades y empresa, además de señalar cómo será la política de compensaciones que BHP Billiton brindará a la población afectada en los últimos veinte años por la presencia de la actividad minera.

Algunos de los aspectos acordados es la entrega a las comunidades de las tierras que les fueron expropiadas por el Estado, y cuyo pasivo la empresa minera considera necesario asumir, entregándoles nuevos terrenos más un adicional de entre 25 por ciento y 50 por ciento.

En relación con el tema ambiental, se ha acordado establecer un programa conjunto de monitoreo



*Títulos de propiedad de sus tierras. Uno de los puntos de conflicto con la mina era el desplazamiento de sus zonas de cultivo y pastoreo.*

del daño producido, de manera que se adopten estándares apropiados para no seguir perjudicando el ecosistema.

Respecto de las denuncias por violaciones de derechos humanos, BHP Billiton ha decidido atender los casos en los cuales estos hechos se produjeron, al margen de que hayan podido ocurrir en la época en que era una empresa estatal, asumiendo las reparaciones materiales o simbólicas a favor de las víctimas o sus familiares.

En el caso del desarrollo sostenible, se ha decidido crear un fondo que promueva la actividad económica local.

El proceso de diálogo continúa. Hay una Comisión de Coordinación y Seguimiento que ahora tiene que asegurar que los acuerdos se implementen y que cuando se produzca alguna discrepancia esta se resuelva de la mejor manera posible. Esperamos que, por el bien del país, este mecanismo continúe y sea tomado como ejemplo por otros actores mineros. ■

## La importancia de reconocer al otro

**gabriela joo**

Área de Educación, IDL

**L**a provincia de Espinar es una de las más pobres del país. Está ubicada a 250 kilómetros de la ciudad del Cusco, entre los 3.800 y los 5.000 metros sobre el nivel del mar, dominada por cerros y extensas pampas, y cubierta por pastos naturales. Casi 58 por ciento de la población trabaja en la actividad agropecuaria; sus habitantes se dedican principalmente a la crianza de vacunos, ovinos y camélidos. Como actividad sub-

sidiaria, aunque muy escasa, cultivan papas, quinua y cañihua.

La actividad minera se inicia a fines de la década de 1980, y es realizada sobre todo por empresas extranjeras. Sin embargo, ya en sus comienzos tuvo dificultades para integrarse a la vida económica de la provincia, y su presencia no se tradujo en una mejora de la calidad de vida de los pobladores del lugar. Muy por el contrario, su expansión significó la pérdida de sus tierras y el deterioro de sus condiciones de vida.

Ello explica el que las comunidades sintieran que la mina era la causa de todos sus problemas. La población no ocultaba su insatisfacción con la negociación de sus tierras; y no solo porque considerara que fue un mal negocio, sino porque fue desalojada de las tierras vendidas sin un acuerdo equitativo entre las partes. Los pobladores denunciaron desalojos forzados, agresiones verbales, daños contra su propiedad, lesiones, entre otras formas de violencia.

"Vendí mis tierras por temor", "La compra-venta se dio en forma violenta", "Nos desalojaron en épocas de lluvia", "Murieron los animales", "Vino a empujar con tractores destruyendo todas mis cosas", eran algunas de las quejas más frecuentes de los campesinos, quienes reclamaban en compensación tierras productivas, una mejor reubicación y la revalorización de sus bienes.

Otro hecho que simboliza muy bien el impacto de la actividad minera en la zona fue el dolor sentido y relatado por los pobla-

## Una mini-CVR

En agosto del 2002, y gracias a la invitación de la Mesa de Diálogo BHP Billiton Tintaya y de las comunidades campesinas de Espinar, participamos en la investigación y elaboración de un informe acerca de las denuncias y testimonios presentados por las comunidades campesinas de Espinar contra la empresa minera en materia de derechos humanos que se habrían producido en los últimos veinte años.

Desde un primer momento, el IDL asumió como un reto muy importante la realización de una investigación que permitiese encontrar la verdad y emitir un informe con opiniones y recomendaciones consistentes que generen la confianza de todos los integrantes de la Mesa de Diálogo, habida cuenta de que no existían en ese momento experiencias de ese tipo en el país.

La posibilidad que se nos abría, entonces, planteaba nuevos desafíos en este campo de intervención para la búsqueda del consenso y la resolución pacífica de los conflictos.

Nuestra labor, definida por consenso en la Mesa, consistía en analizar y determinar de qué manera se habría o no cometido actos contrarios o violatorios de los derechos humanos en perjuicio de las comunidades campesinas vecinas a la mina Tintaya, para lo cual se nos entregó una relación de 34 casos relevantes reportados por ellas entre 1982 y el 2001. Como el encargo involucraba características específicas, se nos concedió un plazo de tres meses.

Para llevar a cabo la investigación se diseñó una metodología basada, en primer lugar, en la recolección de testimonios de las personas supuestamente afectadas y de testigos. Las entrevistas se hicieron de manera individual, en el idioma materno del entrevistado y en un espacio en el cual este se sintiese cómodo y libre para hablar.

Nuestro trabajo culminó con la elaboración de un informe de casos que contenía un análisis de los hechos sucedidos y cómo afectaron los derechos de las personas en ellos involucrados. También se presentaron recomendaciones acerca de cómo resolver conflictos futuros, y se propusieron medidas que previniesen las situaciones encontradas.

dores que tuvieron que trasladar a sus muertos a otro cementerio, pues el anterior estaba ubicado en las tierras negociadas. Pese a que esto había ocurrido hace casi veinte años, seguían recordándolo con mucho remordimiento y culpa.

Este mismo impacto puede explicar también por qué algunos denunciaban casos de personas que se habían dedicado a la agricultura toda su vida y que murieron de depresión por haber

tenido que vender sus tierras y no tener otra actividad alternativa a la cual dedicarse.

En los casos de las denuncias por violaciones sexuales, aquí constatamos que las más afectadas por este flagelo fueron las mujeres pobres, campesinas, quechuahablantes; en tanto que los agresores eran varones que venían de otras zonas, trabajaban para la empresa en tierras aledañas a las comunidades y actuaban haciendo uso de la

fuerza o la seducción por el poder que les daba el dinero, pero luego se fugaban dejándolas en el abandono. En estos casos se pudo constatar la situación de vulnerabilidad, indefensión y pobreza en la que vivían estas mujeres abandonadas con sus hijos, a lo que se sumaba el prejuicio y marginación que debieron soportar en sus propias comunidades, tradicionalmente machistas.

Más allá de los resultados, esta experiencia permitió devolverles dignidad a las personas, reconoció su cultura y sus costumbres, la importancia de la tierra y del respeto de las mujeres en particular y de la población en

## Conclusiones

El informe, además de hacer hincapié en aspectos relacionados con los casos investigados, elaboró conclusiones respecto de las causas que podían haber originado las denuncias. Aquí algunas de ellas:

- Respecto de la manera como se produjeron las negociaciones y ventas de tierras: Las comunidades no disponían de mayor información para suscribir acuerdos razonables. Estos fueron logrados gracias a una dinámica ajena a sus prácticas, como pagos con cheques en dólares, depósitos en cuentas de ahorro cuando la oficina bancaria más próxima estaba a siete horas de viaje en auto.
- En lo que se refiere a los desalojos: Si bien es cierto no se encontró elementos para sostener que hubo una práctica sistemática de desalojos violentos, desde la percepción de los comuneros el hecho de ser trasladados de manera abrupta, a veces con insultos de por medio y algún suceso aislado de desocupación violenta, generó una sensación de haber sido expulsados de un territorio que siempre les había pertenecido.
- En lo que atañe a las denuncias por violaciones sexuales: Muchas de estas agresiones se produjeron en el contexto de una presencia de trabajadores de la empresa minera que no tuvo la debida atención en su momento.

## Recomendaciones

El informe propuso una serie de medidas que repararan materialmente a quienes habían sufrido algún daño de manera directa o indirecta, y sugirió formas de restituir la dignidad de las personas afectadas. La mayoría fueron aceptadas. Veamos algunas:

- Que la empresa asumiera las responsabilidades directas en los casos que se habían determinado.
- Asistencia integral a los afectados y sus familiares.
- Formación de un grupo de trabajo de diálogo y resolución de conflictos que vigile el cumplimiento de las recomendaciones y prevenga futuras situaciones de conflicto.
- Con el fin de sostener una adecuada relación futura entre la empresa y las comunidades, se propuso:
  - Para los casos de ventas de tierras, asegurar a las comunidades asesoría técnica adecuada.
  - Establecer niveles de participación de las comunidades en la determinación de las fórmulas de desarrollo de la zona.
  - Determinar, de mutuo acuerdo, los lugares donde se ubicarían los campamentos mineros.

general. Fue necesario mirar desde la perspectiva de los comuneros y comuneras para comprender la trascendencia de sus símbolos, de sus rituales y de sus prácticas ancestrales que la actividad minera alteró.

La perspectiva de los derechos humanos nos ha ayudado mu-

cho a comprender lo que se estaba viviendo en las comunidades a partir de la instalación de la empresa, porque antes que los beneficios que la actividad minera puede traer al país están la vida y las costumbres de las personas. Es eso lo que faltó considerar cuando se dio inicio a la actividad minera.

El reconocimiento de los hechos ocurridos y la voluntad de la empresa para reparar el daño provocado son gestos muy importantes que otros deberían imitar. Es un gran paso para iniciar con los pobladores de las comunidades vecinas una nueva relación que se sustente en el respeto, la justicia y la igualdad. ■



La República

*Un prolongado y activo paro de agricultores hizo que la nación recordara que Andahuaylas existe. Una vez que pasó todo lo de Humala (absurdo y condenable, pero que generó todo un riesgo en la zona, por si nos hemos olvidado), Andahuaylas volvió a desaparecer de las preocupaciones nacionales. Lo que provocó el reciente paro fue resuelto, pero —como dice el autor— se ha optado por una salida temporal, y se ha dejado pendientes problemas de fondo, debido a la incomprensión y la ceguera respecto de lo que allí ocurre. Y hay que tomar muy en cuenta lo que él nos dice, porque se trata de alguien que conoce muy bien lo que ocurre en la zona desde hace décadas y ha dado suficientes señales de su compromiso con la población.*

# La rebelión de la papa

**marc willems**

Asistente social, ProAnde

**L**as provincias de Andahuaylas y Chincheros formaron siempre una unidad socioeconómica y cultural. Antes de la creación del departamento de Apurímac pertenecieron a la región de Ayacucho. Esta zona fue siempre emblemática en la historia del Perú, porque en ella se ubicó el territorio de la cultura y la confederación Chanka, allí surgió el movimiento rebelde religioso del Takiy Unguy, es la tierra de origen de los danzantes de tijeras y ha sido la cuna de grandes rebeliones nacionales. En la historia más reciente, allí se desarrollaron las tomas de tierras y desde allí se expandió la violencia sociopolítica. Hasta el día de hoy la población es mayoritariamente quechuahablante.

Las provincias de Andahuaylas y Chincheros son las más pobladas del departamento de

Apurímac. Reúnen entre ambas la misma cantidad de población que las otras cinco provincias juntas. Tienen una extensión relativamente pequeña y están pobladas por una gran cantidad de comunidades campesinas. Muchas son ex pagos de las grandes haciendas que desaparecieron con las tomas de tierras de la década de 1970.

Las ciudades intermedias y las capitales provinciales, pequeñas ciudades de *mistis*, ven crecer su población a partir de la desarticulación de las haciendas, y este incremento se acelera durante la violencia política desata en la década de 1980. Otro de los factores que incita a la migración es el encanto de la modernización y el mito de la educación. Hay también en Andahuaylas una fuerte presencia del narcotráfi-

co, que tiene una influencia en la vida económica de la zona.

Allí también se desarrolló el primer movimiento gremial de campesinos contra la dictadura de Fujimori-Montesinos para exigir mejores precios para su producción de papa, después de años de amnesia sindical en todo el país.

## **Campeños y *mistis***

La mayoría de la población de estas dos provincias es campesina, y no cuenta con más de dos o tres hectáreas de cultivos. La titulación de las tierras ha permitido a muchos comuneros ser dueños de sus pequeñas parcelas, lo que desalienta su trabajo en las tierras comunales que aún quedan.

El hecho de haber sido dominados, hasta hace unos treinta

## Historia de un paro

Cuatro años atrás se fundó el Frente de Defensa Agrario (FEDRA), que reunía a las autoridades comunales y a los medianos productores de papa. El FEDRA surgió en reemplazo de la FEPCA, federación agraria que había dirigido las tomas de tierras, pero que ya no existe sino en el ideario de la CCP.

El primer paro del FEDRA, en el 2000, fue el trampolín para que uno de sus líderes, Michael Martínez, lograra llegar al Congreso de la República en representación de Apurímac, momento desde el cual asumió el papel de defensor de los intereses campesinos.

El FEDRA también se comprometió en las elecciones locales con el Frente Popular Llapanchik, movimiento indígena que logró ganar las elecciones en Andahuaylas con un candidato comunero quechuahablante, suceso que provocó una verdadera revuelta en esta ciudad de *mistis*. Sin embargo, con el correr de los años el FEDRA perdió su papel protagónico como gremio.

Hace un mes se ha logrado reorganizar el FEDRA y renovar su directiva. Para mostrar su vigencia, la primera acción organizada por esta nueva junta directiva fue la convocatoria a un paro agrario. Condiciones, las había: el bajo precio de la papa y las promesas incumplidas por el Gobierno.

Sin embargo, la plataforma incluyó varios puntos que no tenían que ver con la problemática del agro, como la construcción de la carretera y de una universidad. Estas demandas fueron incluidas con el fin de que las instituciones y la población se plegasen a la medida de lucha.

En una reunión multiinstitucional realizada en el local del Concejo Provincial se decidió, por unanimidad, apoyar la medida de fuerza. Y la razón es obvia: en estos tiempos preelectorales, nadie quiere oponerse a un paro, menos aun cuando este tiene una connotación política.

años, por los señores y *mistis*, les impide asumir a plenitud su condición de comuneros y ciudadanos. Allí se puede constatar aún vínculos de dominación y de menosprecio de los pobladores de la ciudad respecto de los del campo. Además, las relaciones de padrinazgo y de dominación conducen a los campesinos a trabajar para los dueños de la tierra en condiciones semif feudales.

La mayoría de los nuevos dueños de la tierra son los descendientes de antiguos hacendados y comuneros emergentes. Muchos de ellos migraron a la ciudad de Lima para estudiar y, a su regreso, se encontraron con que ya no eran comuneros y fueron discriminados por ser descendientes de estos.

### Auge papero

El crecimiento explosivo de la producción de papa se inició a principios de la década de 1990, cuando la mayoría de estos

grupos comenzaron a dedicarse al negocio de los fertilizantes y remedios químicos para la agricultura. Una que vez que hubieron incursionado en el campo, se dieron cuenta de que la producción de papa podía generar buenas ganancias.

Los descendientes de los hacendados decidieron entonces volver a sembrar sus chacras que no fueron confiscadas por la reforma agraria, y los otros negociantes hicieron lo propio, poco a poco, en tierras comunales.

Se trata de un fenómeno muy particular: antes el campesino trabajaba como peón o jornalero en tierras ajenas y para un patrón; treinta años después de las tomas de tierras, el comunero trabaja hoy como peón en su propia chacra pero para un patrón ajeno. A los grandes productores de papa les resulta más barato alquilar chacras comunales que tener tierras

propias; ellos alquilan las extensiones que no son trabajadas por los comuneros que no tienen las posibilidades económicas para explotarlas. Como se deja ver, aún existen relaciones feudales en el campo.

El alquiler de estos terrenos comunales es bastante barato. Como quienes los trabajan no son sus dueños, no tienen responsabilidades por estas tierras. Usan indiscriminadamente fertilizantes químicos y cuando, cinco o seis años después, la tierra queda empobrecida, la abandonan y buscan otras. Luego estas chacras necesitan por lo menos veinte años para recuperarse.

Por otra parte, algunos de los grandes comerciantes siembran papa para justificar un ingreso económico que no pueden sustentar porque sus ingresos provienen de actividades ilícitas y no les importa tanto el precio cuanto las apariencias.

La mayoría de los comuneros siembran papa como lo han hecho siempre, en lotes pequeños de media a dos hectáreas, y no son los causantes de la sobreproducción que existe en este momento. Lo son, sí, los grandes productores, porque siembran extensiones de entre 20 y 40 ó más hectáreas.

### Crisis de precios

Por otra parte, el *boom* de los sembríos de papa no ocurrió solo en Andahuaylas. Zonas donde nunca se cultivó papa, como Ayacucho y la misma costa, la están plantando hoy en grandes cantidades, lo que incrementa la oferta y, consecuentemente, reduce los precios de este producto en el mercado.

Entre 1990 y el 2000 la producción nacional de papa se triplicó. De 146.000 hectáreas sembradas en 1990 se pasó a 285.000 en el 2000; de 1'100.000 toneladas obtenidas en 1990 se subió a 3'270.000 toneladas en el 2000. Y los precios han caído, en promedio, de 0,26 dólares por kilogramo a 0,08 dólares por kilogramo. Por si esto fuera poco, el consumo nacional también se ha reducido.

En comparación con Huancayo, Huancavelica, Tarma, Cajamarca y Arequipa, Andahuaylas tiene también la desventaja de que los fletes para el transporte son carísimos (0,35 nuevos soles por kilogramo, más que el precio del producto, que en los últimos tiempos se compraba a 10 centavos el kilo).

Además, el Estado está totalmente ausente de la actividad agrícola: el Ministerio de Agri-

cultura no tiene norte; la región, principiante en estos menesteres, tiene pocas posibilidades económicas, y a los comuneros les resulta prácticamente imposible acceder a préstamos financieros, pues dependen casi totalmente del mercado nacional. No hay, tampoco, ningún intento por industrializar la producción de papa.

Por otra parte, la producción del trigo importado compite deslealmente con la de la papa, pues aquel es subvencionado y sus precios, baratos, le permiten desplazar a la papa en la dieta familiar. El gran beneficiario de este negocio es el socio de Vladimiro Montesinos, el señor Romero, dueño del Banco de Crédito.

*La sensación era que faltaba algo; y ese algo lo puso el Gobierno, que declaró la zona en estado de emergencia.*

### Una interpretación

Para los comuneros, el paro fue una manera de medir su fuerza como movimiento político para el año 2006. La presencia de un alcalde comunero fortaleció su autoestima como actores políticos y fuerza mayoritaria. Para el congresista Martínez, el paro fue una buena oportunidad de asegurarse el apoyo del campesinado en las próximas elecciones. Finalmente, los partidos políticos adherieron el paro para no quedar fuera de la carrera electoral.

Ello no obstante, luego se constató que las fuerzas partici-

pantes en el paro no eran iguales. De hecho, la mayor de ellas estuvo concentrada en los comuneros pobres, pero los medianos y grandes productores y los acopiadores de papa expusieron intereses distintos de los de aquellos.

El paro fue total y pacífico, pero no tuvo la misma contundencia del anterior. La sensación era que faltaba algo; y ese algo lo puso el Gobierno, que, con su torpeza y su incompreensión del contexto sociopolítico, declaró la zona en estado de emergencia. Como si la única respuesta posible consistiese en considerarlos como delincuentes o terroristas. Cuando los algodoneiros bloquearon las pistas en Ica, a nadie se le ocurrió declarar este departamento en estado de emergencia. El trato concedido a Andahuaylas, sin embargo, fue distinto.

La población, entonces, tomó esa medida del Estado, así como la presencia de un número exagerado de policías y militares, como una provocación, y dejó aflorar la rebeldía que se está despertando en provincias, sobre todo como respuesta a los tratos discriminatorios de Lima.

El paro fue suspendido luego de la suscripción de un acta, pero esta no es una solución duradera. El problema del precio de la papa volverá a presentarse una y otra vez mientras no haya políticas agrarias concertadas, mientras el Estado siga subordinado a intereses exteriores, mientras continúe la postergación del Ande por la costa, mientras todos los ciudadanos no seamos verdaderamente iguales... ■

*Hace un año fue asesinado el alcalde de Ilave. Hoy, la ciudad está haciendo esfuerzos para superar el trauma y volver a algo mejor que la normalidad.*

# Ilave: Un año después

hildegard willer



*Municipalidad de Ilave.*

**E**l 2 de abril del año pasado la plaza de Ilave, capital de la provincia del Collao, departamento de Puno, fue colmada por los pobladores que acudieron a escuchar la rendición de cuentas de su alcalde, el señor Fernando Robles. El encuentro fue seguido de una protesta masiva de treinta días que tuvo un desenlace fatal que despertó al país: en plena plaza y a la luz del día, una turba linchó al funcionario público. Una muerte anunciada que nadie impidió.

Desde entonces el nombre Ilave sigue suscitando intensas emociones y pasiones: los ilaveños temen que el pueblo todo sea estigmatizado, y están muy susceptibles a las interpretaciones facilistas de gente que no se ha tomado siquiera el trabajo de pisar el lugar pero tiene acceso a la opinión pública. En Lima, en cambio, el nombre Ilave ha quedado grabado como símbolo de un acto de barbarie incompatible con la construcción de un país moderno.

Doce meses después, Ilave trata de borrar las huellas de aquel día fatal y se presenta como la ciudad laboriosa y comercial que en realidad es. Los estudiantes se dirigen a sus clases, los microbuses van y vienen de Puno al terrapuerto moderno, Francisco Bolognesi saluda desde la plaza como si nada, jamás, hubiera interrumpido el orden. ¿Dónde han quedado las emociones y frustraciones tan dramáticamente expresadas hace ya un año?

Miguel Ángel Flores Chambi, un profesor que debe estar frisando los 40 años, es el nuevo alcalde de Ilave; fue elegido en elecciones complementarias el 17 de octubre del año pasado, luego de un proceso pacífico que demostró que en Ilave sí es posible la democracia. Detrás de estos exitosos comicios está un importante trabajo de concertación de varias instituciones para convencer a los dirigentes de que vayan a participar en las elecciones, con el fin de garantizar la legitimidad del resultado.

Una de las participantes nos cuenta que los chicos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fueron corridos más de una vez cuando visitaban las comunidades. Pero la persistencia valió la pena: las elecciones fueron impecables.

Desde entonces Miguel Ángel Flores ocupa el edificio municipal, un verdadero palacio de cinco pisos con escaleras de mármol falso y un frontis de puro vidrio, herencia de cuatro gestiones anteriores y que empezó a construirse en la administración del histórico líder aimara, izquierdista y posterior congresista tránsfuga Gregorio Ticona.

Los desafíos de la nueva gestión no son pocos. Como hoy se sabe, las principales causas del conflicto fueron las tensiones entre los centros poblados menores emergentes en las comunidades y el gobierno municipal de Ilave —véase el estudio "Municipalidades de centros poblados y conflicto local: las lecciones del caso Ilave" de



Ramón Pajuelo (SER/Oxfam GB, 2005)—, sobre todo aquellas surgidas a raíz de la repartición del presupuesto. Miguel Ángel Flores fue elegido con apenas el 25 por ciento de los votos, de manera que su mayor reto consiste en concertar con las otras fuerzas políticas. Flores quiere aliviar este conflicto a partir de una estrategia de elaboración concertada de los presupuestos participativos, para ganarse la confianza de las comunidades: "Ya hemos aprobado el presupuesto participativo en tres distritos y buscamos una mayor cohesión con las comunidades haciendo obras de electrificación y de servicios básicos".

Para la elaboración concertada de estos presupuestos participativos la alcaldía recibe el apoyo de la Iglesia Católica, de algunas ONG y de la restablecida Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza: ellos salen juntos a las comunidades para establecer con las

autoridades y los pobladores las partidas que les corresponden. Otra estrategia de concertación consiste en incorporar al personal de la Municipalidad a algunos tenientes gobernadores de la zona.

¿Y qué pasó con los regidores involucrados en las protestas del año pasado? Recordemos que aquellos que fueron elegidos en la lista del finado alcalde resultaron heridos y se los expulsó de Ilave, mientras que varios regidores del contrincante, Alberto Sandoval, fueron tomados presos. Mientras que los regidores de Robles parecen haber desaparecido de Ilave, los de Sandoval fueron liberados y se han reincorporado al Concejo hace unas pocas semanas.

Aunque Miguel Ángel Flores señala que el orden ha sido restablecido, advierte que aún quedan algunos focos de conflicto. En primer lugar, las promesas incumplidas desde Lima: quedan pendientes la construcción de la

carretera Masacruz-Tacna, que permitiría ahorrar entre dos y tres horas de camino y avivaría el comercio, y la reconstrucción del antiguo puente peatonal y para bestias de carga.

¿Está Lima atenta al reclamo de los ilaveños? La no realización de las dos obras mencionadas fue el motivo inicial de la ira popular desatada el año pasado, la que, según Miguel Ángel Flores, se podría reavivar si no son atendidas. Los hechos ocurridos el día del primer aniversario de los sucesos del año pasado le han dado la razón: los pobladores amenazaron con iniciar una huelga indefinida si no se realizaban las obras.

### Un dirigente asustado

Rubén Pari podría ser señalado como uno de los perdedores del conflicto. Dirigente barrial y profesor, como el actual alcalde, Pari fue uno de los que criticó más abiertamente la gestión del alcalde asesinado, lo que le costó una orden de detención, aunque



*Miguel Ángel Flores Chambí, nuevo alcalde de Ilave.*

## El puente de llave

En Lima el ganado no pasea por las calles, y los muertos por el tráfico se desvanecen en medio de una indiferencia generalizada. En llave, en cambio, reconstruir el puente peatonal para que la gente y el ganado (principal fuente de ingreso de la zona) transiten sin correr peligro de muerte es un asunto a flor de piel.

Así lo demuestran el paro del 2 de abril del 2005 y una canción de Mario Jinez Ticona, de la comunidad de Lacaya, que ganó el primer premio en el Concurso de Cuerdas organizado por el Municipio de llave, y que dice así:

*El pueblo de llave estaba en problemas  
Pueblo de llave, pueblo querido  
Pueblo del Collao, pueblo aimara demasiado mentado  
Por qué te encontraste en los conflictos (bis).*

*En la fecha del 2 de abril  
Estando en el año 2004  
El señor alcalde se encontró en los graves problemas  
Es triste ver nuestro puente de llave.  
Nuestro puente de Walsawi está muy mal  
Hasta cuándo estará así  
Hasta cuándo estará caído.  
Los domingos es triste para caminar  
Así también mis hermanos  
Nos caemos llevando ganado  
Como para caernos a la profundidad del río.*

*Así es nuestro puente de llave, quién lo hará hacer  
Tenemos nuestro alcalde, tal vez él lo hará hacer  
Cuando todos nos unamos, se hará nuestro puente.*

él asegura que nunca ha estado siquiera cerca del asesinato. Contra él pesa aún una orden de comparecencia, y está asustado tanto por la justicia oficial cuanto por las amenazas de muerte que de cuando en cuando le susurran algunos seguidores del alcalde asesinado.

Rubén Pari no entiende todavía cómo pudo pasar lo que pasó, cómo la sana indignación contra el maltrato del alcalde y la lucha contra la corrupción pudieron terminar en un asesinato. Con un aire escéptico, relativiza el orden que reina ahora en llave: "El alcalde actual está bajo muchas presiones" —dice—. "Los trabajadores 'roblistas' luchan por volver a ingresar en la Municipali-

dad, y la autoridad plena no ha sido restablecida." Como signo de la falta de autoridad hoy imperante, menciona la destitución de un gobernador por los tenientes gobernadores.

Como ya se dijo, los que parecen haber desaparecido del escenario llaveño son los seguidores del alcalde asesinado. Más allá del puñado de trabajadores municipales que luchan por su reingreso en la Municipalidad, el nombre Robles no es siquiera mencionado. El *Finado*, dicen cuando se les pregunta por Robles.

En suma, la paz ha vuelto a llave; pero bien puede tratarse de una paz engañosa, como lo es toda paz que no se asienta en la

justicia. El asesinato de Fernando Robles sigue impune. El supuesto autor material al que se denunció hace un año, un tal *Zapatero*, sigue libre en su comunidad. Ni él se presenta ante la justicia ni esta se dirige a él. Tampoco se han investigado los presuntos actos de corrupción del *Finado*.

El clima de paz hoy prevaleciente en llave obedece entonces a la labor de concertación de todas las fuerzas. llave quiere regresar a la normalidad y superar su mala fama, borrar aquel incidente que mancha su historia. Pero una normalidad que incluye la impunidad sigue siendo una normalidad frágil; tan frágil como la normalidad del país todo. ■